

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de junio de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: JHON JAIRO LOTERO CARDONA
DEMANDADO :	: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-017-2020-00444-01
RADICADO INTERNO	: 111-21
DECISIÓN	: ADICIONA, CONDENA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 153

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

De conformidad con la sustitución del poder que se allega al correo electrónico, por parte del Dr. SANTIAGO MUÑOZ MEDINA (en calidad de representante legal suplente de la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS SAS), se reconoce personería jurídica para representar los intereses de Colpensiones, al Dr. DARÍO MAURICIO TOBÓN CHAMORRO. Por cumplir los requisitos establecidos en los artículos 75 del CGP se le reconoce personería.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita, se **DECLARE** la nulidad - ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual. Y en consecuencia se declare que el demandante está válidamente afiliado a Colpensiones. Se **ORDENE** el traslado al Régimen de Prima Media, de la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro individual que hay ingresado al Régimen de Ahorro Individual por concepto de cotizaciones obligatorias y voluntarias, sin ningún tipo de deducción, los rendimientos financieros del dinero aportado en el Régimen de Ahorro Individual y los bonos pensionales a los que haya lugar. Y se **CONDENE** a las demandadas en costas procesales.

Como supuestos facticos con que sustenta sus pretensiones, narra que nació el 12 de febrero de 1961; se afilió al sistema general de seguridad social en agosto de 1978. En el año 1998, asesores de PROTECCIÓN S.A. le brindaron asesoría sin que le haya suministrado información adecuada, suficiente, clara, comprensible y cierta en relación al traslado, y no se cumplió con la obligación de realizar una evaluación de la situación pensional, ni realizar un estudio de la prestación respecto del Decreto 758 de 1993 y de la Ley 100 de 1993. Que el demandante tiene un total de 1.974 semanas en toda su vida laboral. Le solicitó a las accionadas declararan la ineficacia del traslado y lo anularan, obteniendo respuesta de ambos fondos. Solicita se tenga en cuenta el principio del in dubio pro operario.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 21 de abril de 2021, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación del demandante, al Régimen de Ahorro Individual administrado por PROTECCIÓN S.A.. **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A., a trasladar con destino a la Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, los recursos de la cuenta de ahorro individual del demandante incluyendo para el efecto el capital, sus rendimientos y los recursos del fondo de garantía de pensión mínima, como si hubiese permanecido en el Régimen de Prima Media. Le **ORDENÓ** a Colpensiones, a proceder con el recibo de estos dineros y reflejarlos como semanas en la historia laboral de la demandante. **CONDENÓ**

a COLPENSIONES a activar la afiliación del demandante, al Régimen de Prima Media. Impuso costas a PROTECCIÓN S.A. a favor del demandante.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de Colpensiones solicita se modifique la sentencia, en lo que respecta al traslado de los recursos de la cuenta individual de la demandante con base en el principio de estabilidad financiera consagrado en el art. 334 de la CN, modificado por el art. 1º del Acto 003 de 2011 y se ordene a la sociedad PROTECCIÓN S.A. a trasladar la totalidad de los valores recibidos junto con las cuotas de administración, reaseguros, seguros previsionales los cuales no fueron reconocidos en la sentencia recurrida, quedando en firme los rendimientos financieros con todos sus intereses, los cuales deberán ser indexados y el fondo de garantía de pensión mínima, por tratarse de dineros causados producto del demandante, el cual debe asumir el fondo privado con cargo a sus propios recursos conforme la sentencia SL 4964 de 2018, SL 48989 de 2018, SL 1688 de 2019 porque la estabilidad financiera del sistema no se puede ver afectada por la ineficacia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte accionante solicita se conforme la providencia de primera instancia, luego que la accionada PROTECCIÓN S.A., no logró demostrar su deber profesional de asesoría y de información, al no entregar al potencial afiliado, la información necesaria y que aun existiendo la reasesoría, lo que se ataca es la ineficacia del traslado inicial. Retoma apartes de la sentencia 1452 de 2019. Frente a “la prueba de la diligencia y cuidado incumbe al que ha debido emplearlo” del artículo 1604 del Código Civil, es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del traslado de régimen pensional, y el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente tal y como se explicó en la sentencia SL 19447 de 2017.

Y el apoderado de Colpensiones, solicita se modifique la providencia, teniendo en cuenta que la Circular 019 de 1998 de la Superintendencia Financiera, menciona que cuando el afiliado decida trasladarse de régimen o

de administradora, expresará su voluntad mediante el diligenciamiento del correspondiente formulario ante el empleador o ante la nueva entidad administradora, de conformidad con las disposiciones vigentes. Es por ello que la solicitud de afiliación o traslado se analizada de manera directa y voluntaria ejerciendo su derecho a la libre elección de régimen, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, art. 13 literal b); además las personas que se trasladen al Régimen de Ahorro Individual y posteriormente se devuelvan al ISS, no conserva el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Que, en ese sentido, tal y como se pudo verificar, la AFP PROTECCIÓN S.A, le brindó plena información sobre su traslado, dando cumplimiento al deber de información por arte de la AFP y el actor firmó voluntariamente después de haberle asesorado.

Adicionalmente, el art. 2 de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del art. 13 de la Ley 100 de 1993, prohíbe expresamente el traslado de régimen cuando a la persona le falten 10 años o menos para cumplir la edad de pensión, lo cual aplica al presente caso, teniendo en cuenta que el accionante a la fecha de la radicación de la solicitud de traslado al Régimen de Prima Media, ya se encontraba inmerso en la limitante temporal de edad por contar con 59 años de edad, por lo que Colpensiones debe dar plena aplicación a las normas sin que pueda aceptar el traslado.

Considera que la declaratoria “sin solución de continuidad” afecta el principio constitucional de la sostenibilidad del sistema de la seguridad social, porque los recursos económicos, que se encuentran en la cuenta de ahorro individual y del bono pensional, pueden ser insuficientes para cubrir un eventual retroactivo pensional al que posiblemente se condene a la demandada y la Corte Suprema de Justicia ha informado, que no es posible aplicar automáticamente el mandato de progresividad, pues las decisiones deben buscar que los principios coexistan y se desarrollen de manera armónica, teniendo en cuenta que se dispone de recursos limitados, que deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos. Que, al tenerlo como afiliado al Régimen de Prima Media, se estaría atentando contra la sostenibilidad financiera del sistema pensional, porque el actor cuenta con 64 años y los recursos limitados del Régimen de Prima Media deberán entrar a cubrir los valores o montos económicos y dichas cotizaciones nunca prestaron

el servicio de sostener las pensiones este régimen, durante el tiempo que el demandante estuvo vinculada al Régimen de Ahorro Individual, que lo fue por más de 14 años.

En caso que la sentencia sea desfavorable a su representada, solicita se tenga en cuenta que Colpensiones se basa en el principio de legalidad, por lo que no puede ejercer actos en contra de la ley. Señala, además, que en el Régimen de Ahorro Individual se gravan los aportes de los afiliados con un porcentaje de administración, que no existe el Régimen de Prima Media, y que al no ser equivalentes los aportes transferidos del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, las sentencias 31.989 de 2008, SL 17.595 de 2017, SL 4989 de 2018 y SL 1421 de 2019, han señalado que hay lugar a reintegrar la totalidad de la cotización, tal y como son los recursos cuenta individual de ahorro, las cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, los Rendimientos, la anulación de Bonos Pensionales, el porcentaje destinado al pago de Seguros Previsionales y gastos de administración, y ello se haga de manera indexada.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en apelación: i) Si en el presente caso hay lugar al traslado de las cuotas de administración, reaseguros, seguros previsionales; y ii) Si hay lugar que los rendimientos financieros con todos sus intereses, se reconozcan indexados. En el grado jurisdiccional de consulta, se deberá analizar: i) Si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; y ii) Si hay lugar a condenar a PROTECCIÓN S.A. a trasladar las cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora, tales como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, ambas debidamente indexadas.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que el demandante no es beneficiario del régimen de transición, porque a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no tenía más de 40 años de edad al haber nacido el 12 de febrero de 1961, (fl 13 a 15 del expediente digital); que fue afiliado al ISS hoy Colpensiones desde el diciembre de 1984 (fl. 16) y cotizó a Colpensiones

desde el 7 de diciembre de 1979 al 29 de julio de 1998 (fls. 353 a 356); solicitó traslado a la sociedad PROTECCIÓN S.A. el 30 de junio de 1998 (fl. 21).

Descendiendo al caso particular, se tiene que en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por el accionante, no se evidencia confesión alguna, al haber indicado el demandante que en el año 1998 fueron unos asesores a la empresa y les dijeron que supuestamente el ISS se iba a acabar para que se pasar en PROTECCIÓN S.A., porque allí se jubilar con menos edad y con un salario bueno, que los iban llamando por grupos y su grupo era de 15 a 20 personas, el asesor le dijo que en PROTECCIÓN S.A. se podían pensionar con menos edad, con buena pensión; los que se querían pasar a PROTECCIÓN S.A. pasaban a un asesor que estaba al lado y él tenía los formularios llenos donde solo era firmar; pasó a donde ese asesor porque vio muchas garantías con este fondo el cual es una empresa del Grupo Antioqueño y vieron que era sólido, nunca le dijeron que para pensionarse a más temprana edad y con una buena pensión tenían que hacer aportes mensuales; los iban sentando y el asesor iba llenando el formulario porque ellos le suministraban la información; en la reunión no les hablaron del régimen de transición, no le hablaron que iba a tener una cuenta de ahorro individual, no le hablaron de cómo se iba a calcular la pensiones en el Régimen de Ahorro Individual, no le hablaron de rendimientos, no recuerda la reasesoría solo recuerda que en el 2012 fue una niña con un formulario y le informó cómo estaban las cosas con PROTECCIÓN S.A. que iban bien; reconoce su firma en el formulario de reasesoría pero con ese documento nunca fue la asesora a decirle si a él le convenía quedarse en PROTECCIÓN S.A. o trasladarse por la limitante de los últimos 10 años y en esta reunión no le hizo el cálculo; reconoce la firma del cálculo pero no recuerda que le hayan hecho ese cálculo y esa proyección. Lo que más le llamó la atención para trasladarse es que era una empresa del Grupo Antioqueño y era una empresa sólida; que firmó el formulario en forma libre y voluntaria.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las

condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la L 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley”*, y si nos remitimos al art 271 de la L 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados**- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**” (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;....”.

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aun operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877, 4811 de 2020, SL 1217 y 782 de 2021, y como juez constitucional en las sentencias STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PROTECCIÓN S.A., no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora,

cuando tomó la decisión de trasladarse de Colpensiones, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se violenta el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvieron efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad PROTECCIÓN S.A. aporte reporte del estado de cuenta, resumen de historia laboral, formulario de afiliación, historia laboral, historial de vinculaciones, formulario de reasesoría pensional el 4 de diciembre de 2012, simulación pensional, documento denominado “POLÍTICAS ASESORAR PARA VINCULAR PERSONAS NATURALES” y comunicados de prensa (fl. 411 a 473), lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse del ISS al RAIS, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de la ineficacia de la afiliación y la orden dada de trasladar a Colpensiones el efecto el capital, sus rendimientos y los recursos del fondo de garantía de pensión mínima.

2. De los efectos de la ineficacia

- Frente a la devolución de las **cuotas de administración debidamente indexados**, hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece la sentencia SL 1688 , 1689 de 2019 y SL 782 de 2021 y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos posteriores a la cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, 2º) porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron a la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliado el demandante en esta, en tanto que la cuota de administración es manejada directamente por el fondo de pensiones; y 3º) porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*, y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

- **Las sumas adicionales de la aseguradora**, tales como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, hay lugar a devolverlas **debidamente indexada**, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 17595 de 2017 y SL 4989 de 2018, en donde se rememoró la sentencia 31989 de 2008 en la cual se dijo: *“La administradora tiene el deber de devolver al sistema ..., sumas adicionales de la aseguradora,..”*.

Como consecuencia de lo anterior, se ADICIONARÁ la sentencia de primera instancia, en el sentido de CONDENAR a la sociedad PORVENIR S.A., a

trasladar las cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora, tales como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, ambas debidamente indexadas, conforme a la sentencia SL 1689 de 2019.

- Frente a la solicitud de **indexar los rendimientos financieros con todos sus intereses**, la Sala no accederá a su reconocimiento, teniendo en cuenta los rendimientos financieros deben ser entendidos como los intereses que genera un capital, y en este sentido no puede existir intereses e indexación sobre el mismo concepto.

Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia ordena en su providencia el traslado del capital junto con sus rendimientos sin que ellos sean indexados. Así quedó plasmado en la sentencia SL 1743 de 2021, que rememora las sentencias SL 31.989 de 2008, SL 4964, SL 4989 de 2018, SL 1421, SL 3464 y SL 1688 de 2019 y retoma el siguiente aparte:

*“Por esto mismo, la Sala ha adoctrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del **capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros**. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones”*

Costas en esta instancia en la suma de **\$302.842** a cargo de Colpensiones y a favor de la parte demandante por haber salido avante parcialmente el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, en el sentido de **CONDENAR** a la sociedad PROTECCIÓN S.A. a trasladar a Colpensiones las cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora tales como

la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, ambas debidamente indexadas.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia emitida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Costas en esta instancia en la suma de **\$302.842** a cargo de Colpensiones y a favor de la parte demandante por haber salido avante parcialmente el recurso de apelación.

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 103 del 16 de junio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>